

■ PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

■ Saldo electorales

■ Ileso, el partido del Estado

La modernización concebida y practicada por el equipo gobernante se limita a lo económico, donde se adoptan medidas de gran audacia, pero no llega a la política, como se advierte a cada paso, y especialmente en coyunturas electorales como las del estado de México. Independientemente de los datos estadísticos, el PRI manifestó de nuevo su decisión de continuar siendo el partido dominante casi único. La excesiva presencia del Estado frente a la sociedad, que en materia económica horroriza al grupo gobernante, permanece, y aun se refuerza, en el ámbito electoral.

Decisiones tan atrevidas y polémicas como adelgazar la administración pública, con la venta de empresas, la reducción de sus funciones y aun la desnacionalización bancaria, muestran una voluntad reformadora inequívoca. Cualquiera que sea la opinión que el sentido de esas medidas produzca, no se les puede regatear el carácter de verdaderas conmociones en hábitos y usos, así como en la estructura misma del poder mexicano. Pero no hay consonancia entre esa decisión y la de mantener al PRI en su tamaño y naturaleza actuales.

La verdadera modernización electoral sólo puede consistir en que el PRI se convierta realmente en un partido más, sujeto a las normas de la competición que regulan la actividad de todos los partidos. Pero con toda evidencia se ha resuelto que no sea así. Quienes no se han asustado ante el desafío de dismantelar al Estado, no quieren dismantelar el partido del Estado.

La voluntad de hacer ganar al PRI sin reparar en medios tiene un múltiple efecto pernicioso. No sólo mantiene el régimen de no alternancia, que es ya un raro caso en el mundo, sino que desalienta a los ciudadanos, y con ello contribuye a la dominación del poderoso, que hasta puede invocar en su favor el abstencionismo; frustra a la oposición, que no puede ya no digamos aspirar al gobierno, sino ni siquiera a constituir un

instrumento regulador y encauzador de la opinión pública, porque disponen de mejor material, en las discusiones en su seno, los ingredientes rijosos e impugnadores que los programáticos y alternativos; y finalmente, empuja hacia mecanismos no institucionales, a cuya apelación se responderá con agudización del autoritarismo.

Se dirá que todo este razonamiento deriva de creer en las denuncias de la oposición y en no conceder semejante crédito a las afirmaciones del gobierno y su partido. No es así. Se basa simplemente en el efecto que las puras apariencias, así no fueran correspondientes con la realidad, produce en el comportamiento político. Se puede conocer con suficiencia, y hasta medir el escrúpulo con que la Comisión Estatal Electoral organizó en el estado de México las elecciones, contando en la inmensa mayoría de los casos con el asentimiento de todos los partidos; y no obstante, contrastado ese escrúpulo con la imagen que el público participante se forma de las elecciones (no sólo por la impugnación opositora), pesa más la sensación de que el gobierno se ha atrincherado en el poder y que de allí saldrá sólo por la violencia.

La fórmula ha llegado a convertirse en lugar común, pero sigue siendo válida. El PRI vence pero no convence. Menos aún lo hace cuando acude, por fuerza de las inercias, por decisión política, por el peso de los intereses, no sólo al fraude cibernético, no detectado a tiempo por la oposición, a la que después se acusa de una ineficacia producida por el propio sistema político, sino a la práctica de abusos que parecían ya periclitados, como el robo de urnas o las brigadas móviles de votantes, aspectos que sin duda aparecieron en los comicios del 11 de noviembre. No es admisible decir, por supuesto, frente a esos acontecimientos, que su frecuencia es tan escasa que no alcanzan a nublar la jornada electoral, porque eso equivale a creer que en efecto Rosita Álvarez estaba de suerte el día en que Hipólito disparó sobre ella, porque de tres tiros que recibió, nomás uno era de muerte.

Más obvio es el autoritarismo electoral cuando opera dentro del PRI mismo. En Hidalgo y México abundaron los casos en que candidatos impopulares o arbitrarios consiguieron la postulación priísta, y ese partido la llevó adelante aunque se metieran en la nariz de sus dirigentes las pruebas del fraude o la inelegibilidad de los candidatos.